

San Juan de Pasto, 12 de junio 2024

Doctor
JAVIER OSWALDO USCATEGUI AVILA
JUEZ CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO
E.S.D.
Ciudad

Ref. Pronunciamiento sobre excepciones (Art. 175 Par. 2 C.P.A. y C.A.)

Radicación: 520013333004-2024-00054-00
Medio de control: Reparación Directa
Demandante: Teresa Noguera
Demandado: Cámara de Comercio de Pasto

DANIEL ARELLANO MARTINEZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.299.656 de Pasto, con tarjeta profesional No. 264.591 del C.S. de la J, obrando en mi condición de apoderado judicial y extrajudicial de la señora TERESA NOGUERA, por medio del presente escrito me permito presentar ante usted PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES interpuestas por la parte demandante de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2011 y las demás normas concordantes, de la siguiente manera:

1. FRENTE A LA EXCEPCIÓN DENOMINADA: IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN POR NO ESTRUCTURACIÓN DEL DAÑO ALEGADO

Para descorrer esta excepción, lo primero es mencionar que existen diferentes títulos de imputación de responsabilidad en contra del estado, como en el presente se está hablando de la pérdida de oportunidad, la principal característica de dicha tipología de daño es, según lo rememora la sentencia citada en la demanda en la que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con radicado 05001-23-26-000-1995-00082-01(18593) de fecha agosto once (11) de dos mil diez (2010). C.P. MAURICIO FAJARDO GOMEZ, define a la pérdida de oportunidad como:

“todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta éste que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio —material o inmaterial— para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el correspondiente resarcimiento.

En ese sentido, los argumentos esbozados por la apoderada de la parte demandada quedan sin asidero jurídico, por cuanto en el presente caso el título de imputación es especial, ya que el valor de la vulneración se deriva de la imposibilidad que la Cámara de Comercio generó a mi representada de perseguir una obligación que ya tenía un título ejecutivo y una orden de librar mandamiento

de pago, (actualmente inclusive existe orden de seguir adelante con la ejecución y se encuentran en firme las liquidaciones de crédito y costas) al registrar una compraventa que contravino una orden judicial previa en la que el despacho judicial había ordenado dejar vigente una medida cautelar de embargo del establecimiento de comercio LAUJ DE COLOMBIA.

2. FRENTE A LA EXCEPCIÓN: HECHO GENERADOR NO ES LA CAUSA DEL PRESUNTO DAÑO

Se debe señalar que la omisión por parte de la Cámara de Comercio de Pasto NO ES PRESUNTA y por el contrario es muy clara, ya que del expediente de registro se puede colegir que, pese a que existe una orden en la que el Juzgado Segundo Civil de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pasto ordenó mantener vigente la medida cautelar de embargo y secuestro del establecimiento de comercio LAUJ DE COLOMBIA, dicha entidad omitió abiertamente la orden proferida y consecuentemente el **24 de enero de 2022 a las 11:44 de la mañana** registró la compraventa del establecimiento de comercio LAUJ DE COLOMBIA entre los señores DELIA LUZAIDA YELA CALVACHE y JHOBANI EDUARDO SANTACRUZ.

En segundo lugar, es más que claro que la omisión en el registro de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Segundo Civil de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Pasto es el hecho que generó el daño causado a mi representada toda vez que de conformidad con el artículo 526 del Código de Comercio, la enajenación del establecimiento de comercio tiene dos requisitos: (I) constar en escritura pública o documento privado y (II) que dicho documento sea reconocido por los otorgantes ante funcionario competente. En contraste, de conformidad con el numeral 3 del artículo 86 del Código de Comercio, las Cámaras de Comercio del País tienen como función "3) *Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este Código;*".

En ese sentido, al ser la Cámara de Comercio la entidad encargada de certificar los actos inscritos y al requerirse para la compraventa de los establecimientos que el documento privado sea reconocido por el funcionario competente, es más que claro que la única autoridad que podía generar oponibilidad de la medida cautelar ordenada por el juzgado segundo era la Cámara, la compraventa de establecimientos de comercio no se perfecciona sin su registro, y por lo tanto la compraventa únicamente hubiese sido inoponible en los términos del artículo 901 del Código de Comercio, si la Cámara de Comercio se hubiese abstenido de registrar la compraventa del establecimiento. Por el fundamento legal antes señalado, queda claro que lo señalado por la abogada de la parte demandante, al expresar lo esbozado en esta excepción no tiene asidero jurídico e inclusive contraria lo que acepta como cierto en su contestación de demanda.

3. FRENTE A LA EXCEPCIÓN: IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL POR EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS JUDICIALES IDÓNEOS:

Se reitera la sentencia proferida por la Subsección a de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con radicado 25000-23-26-000-1996-03282-01(20042) y fecha siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) C.P. HERNAN ANDRADE RINCON, en la cual se señaló lo siguiente:

"[...] Asimismo, de las pretensiones de la demanda no se advierte solicitud alguna encaminada a obtener la nulidad de la inscripción de esa escritura pública en el folio de registro inmobiliario, puesto que dicha orden ya fue dada por la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de disponer la cancelación de la inscripción que de forma fraudulenta se realizó, por manera que al no cuestionar la legalidad de un acto administrativo de registro, no se está en presencia de

escenarios en los cuales resultaría aplicable la acción de nulidad² y, en consecuencia, la acción de reparación directa ejercida en el presente asunto para obtener la indemnización por el aludido hecho dañoso demandado resulta procedente. Por consiguiente, procede la Sala a abordar el análisis de fondo respecto del asunto sometido a su conocimiento.” (negrilla fuera del texto).

A fin de analizar la jurisprudencia expuesta de cara al caso en concreto, se hace oportuno realizar especial énfasis en que en el presente caso, no se está debatiendo la nulidad del acto de registro, ni tampoco la presunta mala fe del señor JHONBANI EDUARDO SANTACRUZ, pues este es un proceso adicional y completamente diferente inclusive en temas de jurisdicción, al caso aquí tratado, y que dependera del resorte exclusivo de la demandante, pues en el presente proceso se está debatiendo la negligencia de la entidad privada con funciones públicas de registro, al levantar una medida cautelar sin un fundamento fáctico, ni jurídico, lo cual conllevó a la causación de un daño a mi representada derivada de la omisión en el cumplimiento de una función legalmente impuesta a la Cámara de Comercio de Pasto, lo cual conllevó a una falla en el servicio registral, la demandada quiere desviar la atención de las partes y el operador jurídico a un problema jurídico no relevante ni objeto del presente proceso para disimular la omisión evidente cometida.

4. FRENTE A LA EXCEPCIÓN: NO CONCURREN LOS ELEMENTOS QUE DE MANERA REITERADA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO HA ESTABLECIDO PARA QUE SE DECLARE LA RESPONSABILIDAD, REFERENTE AL DAÑO ANTIJURÍDICO Y NEXO DE CAUSALIDAD

Es necesario reconocer que en la contestación de la demanda, la parte demandada desconoce la existencia de diferentes tipologías de responsabilidad, entre las cuales se encuentra la pérdida de oportunidad. La parte demandada realiza un análisis de los elementos de la responsabilidad indiscriminadamente, sin dar un enfoque concreto a lo atinente a lo que se está reclamando, en ese sentido, se debe reiterar que en el presente caso si se cumplen con los elementos necesarios para la configuración de responsabilidad y por lo tanto nos atenemos a lo expuesto en el escrito de la demanda.

Sin embargo, se hace un especial énfasis en que en el presente caso los requisitos para la configuración de la pérdida de oportunidad, se configuran fehacientemente, puesto que hay un hecho que generó el daño, existe un daño, un nexo de causalidad, pero además se configuran los requisitos de certeza respecto de la oportunidad que se pierde, la imposibilidad definitiva de obtener el provecho y la situación que tiene la víctima para encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado.

5. FRENTE A LA SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO

El suscrito considera que en el presente caso no se configura dicha figura, toda vez que las acciones correspondientes frente al señor JHOBANI SANTACRUZ pueden ser perfectamente perseguidas en un proceso judicial aparte, pues el resultado de la presente sentencia no tendrá efectos respecto de él, puesto que la omisión en el registro por parte de Cámara de comercio no tiene nada que ver con las actuaciones del señor SANTACRUZ ERAZO, su mala fe o no, no es un problema jurídico relevante para el objeto del presente medio de control, pues el mismo tiene la finalidad que ante la jurisdicción contencioso administrativo se declare la responsabilidad administrativa y patrimonial de la entidad que en este caso cumple funciones públicas por los perjuicios materiales y morales causados a la señora

TERESA NOGUERA, con ocasión de la omisión en el registro de la medida cautelar decretada por el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Pasto, siendo así no existe entre la Cámara de Comercio y el señor SANTACRUZ ERAZO relación jurídica sustancial alguna en relación con el deber de registrar y cumplir las ordenes judiciales impartidas, en este caso el registrar y mantener la medida cautelar de embargo, pues esta solo es una atribución dada a las Cámaras de Comercio en cumplimiento de la función pública de registro, responsabilidad que no puede ser trasladada a un tercero persona natural.

En los anteriores términos presento mi pronunciamiento sobre las excepciones planteadas por la entidad demandada solicitando a su señoría que se desestime cada una de ellas por no tener ningún sustento fáctico, jurídico o probatorio.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Arellano M3'.

DANIEL ARELLANO MARTINEZ

C.C. 1.085.299.656 de Pasto

T.P. 264.591 del C. S. de la Judicatura.